

ECONOMÍA

“Ningún país puede permanecer en el limbo legislativo durante mucho tiempo sin padecer riesgos económicos graves”, editorializan algunos medios internacionales sobre la situación que vive España. La falta de Gobierno y el parón administrativo estarían restando ya cerca de cuatro déci-

mas de crecimiento en 2016. Los indicadores avanzados muestran, por ejemplo, que si las ventas de grandes empresas crecieron un 6% en 2015, ahora lo hacen un 2,5%, al mismo tiempo que la inversión extranjera cae un 29,9% entre enero y julio de este año.

La parálisis en la contratación pública y en la capacidad para atraer inversión pasan factura a la riqueza nacional

El bloqueo político resta 10.000 millones al PIB

■ Ana Sánchez Arjona

“España crece de la mano del piloto automático”, decía en una información reciente The Wall Street Journal, que hacía especial énfasis en que “la sostenida expansión económica de España desafía la preocupación de que un estancamiento político podría empañar uno de los puntos económicos sólidos de Europa”.

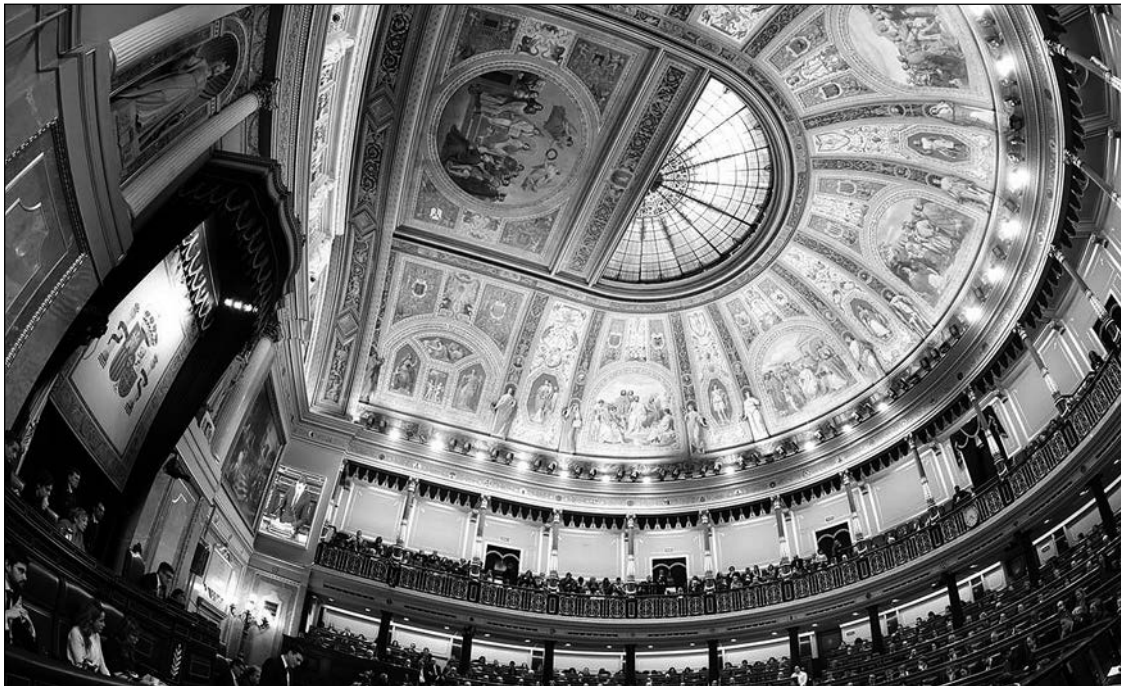
Pero esa solidez está en manos de un gobierno en funciones que no puede elaborar presupuestos, ni dictar nuevas leyes, ni realizar una política económica efectiva para fomentar el crecimiento. Es tan solo una especie de retén de guardia que se ocupa del día a día y que, en su caso, está preparando para hacer frente a los imprevistos.

En este sentido, el periódico norteamericano ha publicado una estimación del coste que supone el bloqueo político para nuestra economía y lo ha cifrado en 10.000 millones al mes. Cerca de 10.000 millones perdidos hasta el momento por culpa de la incertidumbre, la paralización de la gestión y contratación pública, la inseguridad en la continuidad de contratos o la limitación de nuestro atractivo para la inversión extranjera.

Una conclusión certera que corrobora el periódico con un sondeo entre algunos de los principales analistas de nuestro. Se trata de expertos que han destacado que la falta de Gobierno y el parón administrativo estarían restando ya cerca de cuatro décimas de crecimiento al año 2016 y otras seis o siete décimas a 2017. Es decir, algo más, de un punto de PIB.

Y aunque el parón político todavía no ha afectado al crecimiento, sí podría frustrar, de nuevo, los planes para cumplir con los objetivos de déficit. La Fundación de Cajas de Ahorros, Funcas, calcula que el desfase de las cuentas públicas podría ser este año y el próximo bastante mayor que lo previsto anteriormente, hasta el punto de que España se saltaría las cifras pactadas con Bruselas. En concreto, y según las previsiones publicadas en el informe, España cerrará este año con un desequilibrio del 4,6% del PIB este año y en el 3,6% en 2017.

Funcas atribuye las dificultades para recortar el déficit a la falta de gobierno. “La ausencia de nuevas medidas recaudatorias hace augurar un déficit del 3,6% del PIB, es decir un desvío de medio punto con respecto a los nuevos objetivos”, explica el texto. La imposibilidad de la acción gubernamental ha provocado que la entidad haya tenido que revisar los pronósticos de déficit público para este año y el próximo al alza, con subidas de ocho y seis décimas, respectivamente. El director general de la Fundación, Carlos Ocaña, lamentó que la falta de un gobierno constituido esté aplazando decisiones económicas,



Según los expertos, la falta de un gobierno constituido está aplazando importantes decisiones económicas

y dijo que “no se pueden aplazar indefinidamente”, en alusión al ajuste presupuestario, y que tener “una economía paralizada no es bueno”. “Se necesita un gobierno con capacidad para tomar decisiones y dirigir la política económica”. El director de Coyuntura Económica Raymond Torres, recordó que es necesario tomar medidas adicionales para poder alcanzar los compromisos con Bruselas y señaló que el paro también se reducirá a un ritmo menor que lo previsto.

Y es que, los indicadores económicos más avanzados dejan constancia de lo que ocurre: si las ventas de grandes empresas marcaron avances del 5% en 2015, ahora

registran subidas más leves del 2,5%; si el consumo de electricidad marcó el año pasado un crecimiento del 1,7%, ahora baja un 0,4%; si el consumo de cemento subía un 5,7%, ahora cae un 2,3%, o si la matriculación de vehículos de carga avanzaba un 35,6% anual, ahora se limita al 14,7%.

Prórroga de los PGE

El bloqueo político comienza a tener consecuencias palpables en la economía real. De tal manera que inversión extranjera se desploma un 29% en el primer semestre del año. Según las estadísticas del Registro de Inversiones Exteriores publicadas por el Ministerio de

La falta de Gobierno y el parón administrativo estarían restando cerca de cuatro décimas de crecimiento al año 2016 y otras seis o siete décimas a 2017. Es decir, algo más, de un punto de PIB

Economía, en términos brutos la inversión productiva foránea cayó entre enero y junio desde los 9.415 millones hasta los 6.716 millones de euros. Sin embargo parece que el dato negativo tiene matices. En realidad, según el Ejecutivo en fun-

ciones, la caída de un año para otro obedece a un efecto estadístico al comparar con un primer semestre de 2015 excepcionalmente bueno en el que la economía se disparaba y los precios de los activos eran todavía bajos.

La prórroga de los Presupuestos de 2016 afectará de lleno a algunos de los principales gastos del Estado, que no se podrán actualizar por ahora, como las pensiones o las retribuciones de los funcionarios.

Este compás de espera está dejando sentir ya en la obra pública. Las licitaciones adjudicadas en los ocho primeros meses de 2016 ha caído un 43,47% con respecto al mismo periodo de 2015.

Según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recogidos por Infociv-Gedeco, durante este pasado mes de agosto las licitaciones han registrado un descenso de un 2,2% con respecto al mes de julio de 2016,

Y es que la falta de Cuentas Públicas dejará en el aire licitaciones por valor superior a los 1.800 millones de euros.

Un escenario poco optimista que se materializará si hay terceras elecciones. El sector de la construcción está convencido de que unas cuentas públicas prorrogadas supongan de hecho un nuevo ajuste a la baja de la inversión en infraestructuras.

No se licitaría obra nueva, y puede haber serios retrasos en la contratación. El sector critica el continuo ajuste del déficit público a costa de las infraestructuras y de la inversión pública en general, y teme un ajuste adicional del 11% este año a su costa vista la presión de Bruselas sobre el déficit.

Los últimos datos de Fomento señalan que se adjudicaron nuevos contratos de obras por importe de 752,8 millones durante los siete primeros meses del año, volumen un 35,48% inferior al de un año antes, lastrado por el desplome del 59,5% que registra la adjudicación de trabajos de AVE.

El Ministerio de Fomento es clave para la inversión pública ya que supone el 42% del total de las inversiones de las administraciones públicas. Sin embargo otras administraciones no son tan cumplidoras, las autonomías licitaron solo 1.436 millones, con una caída del 27,9% respecto a igual periodo del año pasado, mientras los ayuntamientos contrataron 1.757 millones, un 5,4% más.

No solo es The Wall Street Journal sino varios medios de la prensa internacional se ocupa del atasco a la vez que muestra su asombro por la incapacidad de los políticos españoles de ver más allá de lo que les marca sus intereses de partido.

Por ejemplo los medios alemanes como la Bayerischer Rundfunk o Radio Baviera han realizado un análisis profundo consultando a expertos y analistas de nuestro país.

La conclusión: “Conservadores y socialistas se están bloqueando entre sí y las inversiones esperan”. Se han frenado las licitaciones para las infraestructuras, todo el mundo está a la expectativa, “ningún ministro firma contratos” y no hay presupuesto. Un editorial en The New York Times bajo el título ‘Atasco en España’ recoge la parálisis política de estos meses, pero reconoce que “curiosamente el sufrimiento está controlado”. Entre otras cosas, “la calificación crediticia de España es saludable y la Bolsa ha aguantado el Brexit mejor que en otras partes de Europa” para añadir que: “Esto puede ser motivo de ironía sobre la inutilidad de los políticos, pero ningún país puede permanecer en el limbo durante mucho tiempo sin riesgos económicos graves”.

El marrón, para las CC AA

■ Las Comunidades Autónomas recibirán este año 4.000 millones de euros menos a través del Fondo de Liquidez Autonómica, FLA, por el hecho de no haber podido ratificar en el Parlamento el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por el que las autonomías habrían podido tener un déficit del 0,7% en lugar del 0,3% previsto para este ejercicio, según fuentes del Ejecutivo.

Sin embargo, esta financiación adicional que suponía un objetivo

más alto de déficit no se podrá realizar por falta de Gobierno, ya que un Ejecutivo en funciones no puede llevar al Parlamento estos nuevos objetivos ni el aumento de la financiación que ello conlleva.

A todo esto hay que sumar que sin techo de gasto y sin límite de endeudamiento, es imposible hacer los Presupuestos de 2017. Y esto significa que algunos gobiernos regionales se verán obligados a prorrogar un año los Presupuestos de 2016, con todo lo que eso conlleva.

El hecho de que al prorrogarse los Presupuestos Generales del Estado de este año, que deberían presentarse en el Congreso antes del 1 de octubre, las comunidades autónomas carecen de un marco presupuestario. Entre otras cosas, porque buena parte de su financiación depende de transferencias de la Administración central a los gobiernos regionales.

Ahora se trabaja con un plan A y un plan B. Es decir, aprobar los Presupuestos, aunque sea de forma

transitoria, o desistir a la espera de que haya Gobierno en España.

Hay que tener en cuenta que el conjunto de recursos de la financiación autonómica sujeto a entregas a cuenta ascenderá este año a 95.492 millones de euros, lo que supone casi el 57% de los gastos totales previstos por la CCAA. Y como dice un responsable de Hacienda autonómico “tampoco está garantizado que el próximo Gobierno no haga cambios sustanciales en el sistema de entregas a cuenta”.